

¿Es rentable la crispación?

JULIÁN SANTAMARÍA OSSORIO

LA VANGUARDIA, 21.01.07

Este sondeo revela que hoy la estrategia de la desmesura divide a la sociedad y daña más a quien la promueve

En el curso de esta legislatura han pasado muchas cosas. La economía y el empleo han crecido más que en la anterior - cuando España iba bien-, se han reducido el desempleo y la precariedad, se han extendido los derechos civiles a amplias capas de ciudadanos, se han ampliado los pilares del Estado de bienestar y se han ocupado más espacios en la esfera internacional. Pese a todo, España sigue teniendo ante sí grandes problemas, como el de la productividad, el de la vivienda o el de la inmigración, que conciernen y preocupan a todos. Curiosamente, no han sido las cuestiones sociales y económicas las que han centrado el debate entre las principales fuerzas políticas, ya que estas lo han llevado a la discusión sobre la legitimidad del triunfo electoral de Zapatero, las reformas estatutarias o la conducción de la política antiterrorista, temas que, por definición, deben quedar en democracia fuera de la competición electoral.

Es fácil que cuando esos asuntos dominan la agenda pública, la atmósfera se vea enrarecida y algunos dirigentes políticos caigan en la tentación de magnificar al límite los desacuerdos con los demás, a elevar de forma desmedida el tono de sus protestas, a expresar con igual desmesura sus discrepancias con el adversario y a descuidar o ignorar el debido respeto a éste a la hora de calificar sus errores y desaciertos. El resultado es lo que llamamos la crispación, un clima en el que no hay acuerdos posibles, que divide a la ciudadanía y que algunos justifican en la medida en que pudiera resultar electoralmente rentable. Los datos de este estudio confirman que la estrategia de la crispación polariza y divide a la sociedad pero desmienten que sea rentable en la situación actual.

Para empezar, la percepción de la situación política es sumamente negativa. Casi el 60% de la población así lo considera, una cifra con pocos precedentes, si tiene alguno, en la historia de la democracia española. Y ello pese a la percepción favorable que tienen los ciudadanos de la situación económica, lo

que, en circunstancias normales, contribuye a mejorar la evaluación de la coyuntura política. En segundo lugar, la población se divide a la hora de valorar la gestión del Gobierno, la forma en que ha conducido el llamado proceso de paz o su actuación tras el atentado. Se divide casi a partes iguales con un saldo ligeramente a favor o en contra, según los casos, a la vez que se manifiesta abiertamente crítica con la oposición en cada uno de esos aspectos. Alrededor del 60% de los entrevistados desapruueba la conducta de la oposición en todos ellos, sin que la respalde más allá de una cuarta parte.

La lucha contra el terrorismo ha sido el tema central de la confrontación, tras aprobarse en el Congreso el Estatut de Catalunya y producirse el anuncio de ETA de una tregua indefinida, y ha adquirido un relieve muy especial desde que el 30 de diciembre ETA interrumpió el proceso con el brutal atentado de Barajas, que ha vuelto a convertir al terrorismo en la primera de las preocupaciones de los españoles. Por vez primera en la historia de la democracia española, el primer partido de la oposición ha negado al Gobierno su respaldo a explorar las posibilidades de lograr el fin dialogado de la violencia y, por vez primera, tras el fracaso del intento, se ha empeñado en una crítica despiadada de los errores gubernamentales que, sin duda, han existido, y en oponerse a cualquier iniciativa que se aparte de su propia visión del asunto. ¿Cuál ha sido la reacción de los españoles ante esas actitudes? ¿Es rentable en algún sentido la estrategia de la crispación?

En primer lugar, tres de cada cuatro entrevistados entienden que Zapatero hizo bien al iniciar el proceso de diálogo, mientras que tres de cada cinco afirman que la oposición no actuó de forma responsable negando su confianza al Gobierno. Y aunque los ciudadanos están divididos respecto de si el Gobierno hizo lo suficiente para alcanzar el consenso con la oposición, casi el 70% sostiene que ésta dificultó la tarea de aquél de forma irresponsable.

En segundo lugar, más de la mitad responsabiliza al PP de la desunión, frente a una cuarta parte que la atribuye al PSOE. Casi el 60% reconoce que es Zapatero quien mayores esfuerzos ha hecho por lograr el acercamiento entre ambos, frente a un 15% que se los imputa a Rajoy. Y, de cara al futuro, dos terceras

partes de los españoles consideran innecesario adelantar las elecciones, y más de cuatro de cada cinco entienden que si un día se dan las condiciones adecuadas, el Gobierno debería hacer un nuevo intento de acabar con la violencia mediante el diálogo.

Por último, los indicadores políticos y electorales muestran que esa atmósfera ha dañado la imagen de casi todos los partidos, pero en especial la del PP, y que la distancia electoral entre PSOE y PP no sólo se amplía de forma sensible, sino que alcanza su punto máximo en esta legislatura merced al significativo retroceso de tres puntos que por vez primera experimentan los populares. En cambio, el Gobierno mantiene los apoyos que logró en el 2004. Los datos son abrumadores y hablan por sí solos de la poca rentabilidad de la estrategia de la desmesura.

Después del atentado de Barajas, que puso fin al diálogo para acabar con la violencia, tiene menos sentido la mutua recriminación de los respectivos errores que la necesidad de reaccionar una vez más con la sensatez y la solidaridad que ha caracterizado en ocasiones similares a las fuerzas democráticas, que han eludido la confrontación y buscado el acuerdo. A veces se olvida que el éxito - relativo si se quiere- de los Pactos de Ajuria Enea y Madrid, y luego del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, descansó sobre todo en el acuerdo de los partidos para excluir la lucha antiterrorista del debate político, dejando su dirección en manos del Gobierno y discutiendo en privado las posibles diferencias de apreciación. Todo el mundo sabe que eso no basta, pero también que sin esa condición hay poco que hacer. Los datos de este estudio, coincidentes en líneas generales con otros publicados, lo confirman de forma elocuente.

JULIÁN SANTAMARÍA OSSORIO Catedrático de Ciencia Política de la UCM y presidente del Instituto Noxa Consulting